

Nueva Sociedad Nro. 148 Marzo-Abril 1997, pp. 12-19

Uruguay. La izquierda avanza hacia el gobierno

Guillermo Waksman

Guillermo Waksman: periodista uruguayo, director del semanario *Brecha* desde 1993, Montevideo.

Palabras clave: elecciones, reforma constitucional, situación política, Uruguay.

La reforma de la Constitución –que modificó el sistema electoral cuando lo más probable es que la izquierda obtenga la Presidencia en la próxima elección (1999)–, el aceitado funcionamiento de una coalición de gobierno integrada por blancos y colorados, la comprobación de varios actos de corrupción en que habrían incurrido altos funcionarios del último gobierno (encabezado por Luis Alberto Lacalle), y la férrea voluntad de los partidos tradicionales de no remover el tema de los derechos humanos durante la dictadura, formalmente enterrado pero que vuelve a aparecer cada poco tiempo, son quizá los hechos más destacados del actual gobierno uruguayo, el tercero desde la restauración democrática y el segundo de Julio María Sanguinetti.

Las elecciones de noviembre de 1994 terminaron en un virtual triple empate: las ganó el Partido Colorado, con el 32% de los votos, apenas 1% más que el Partido Nacional (o blanco) y dos puntos más arriba que el izquierdista Frente Amplio. El cuarto lugar lo ocupó el Nuevo Espacio, que encabeza el senador Rafael Michelini, de modo que los votos de izquierda sumaron el 37%, contra el 32% de los colorados y 31% de los blancos.

La historia democrática del siglo XX sólo registra gobiernos del Partido Colorado (casi todos) y del Partido Nacional (tres, incluido el que culminó con las elecciones del 94). La izquierda, que hasta la fundación del Frente Amplio, en 1971, no pasaba del 5% –o excepcionalmente del 8%–, llegó al 18% en aquel año y superó cómodamente el 20% en las dos elecciones posteriores a la dictadura (1973-1985), las de 1984 y 1989.

La vieja línea divisoria entre el Partido Colorado y el Nacional –el primero, con su fuerte en Montevideo y en la industria, y el segundo, con su base en el interior del país y en los productores agropecuarios–, se había desvanecido ya a mediados de la década de los 50. Antes de la dictadura no quedaban siquiera rastros de diferencias programáticas nítidas entre ambos partidos. Cada uno

contaba con sectores que, en términos relativos, podían considerarse más hacia la izquierda, hacia el centro o hacia la derecha. Las coincidencias programáticas eran mayores entre sectores de cada uno de esos partidos con los de otro, que con los propios aliados. Sin embargo, a la hora de las elecciones, los votos se sumaban por partido, con independencia de que cada uno postulara muchos candidatos y sostuviera los programas más diversos y hasta contradictorios.

En las elecciones de 1994 surge una nueva ecuación y queda en evidencia que, de mantenerse las tendencias de crecimiento de cada fuerza política y las reglas de juego vigentes en materia electoral, el Frente Amplio será el ganador en noviembre de 1999. Se trata de una realidad llamada a condicionar todos los movimientos políticos –tanto de los partidos tradicionales como de la propia izquierda y tanto hacia afuera como hacia el interior de cada fuerza– durante el gobierno de Julio María Sanguinetti. Así ha ocurrido en estos dos años, y con mayor notoriedad, en 1996.

Una sólida coalición

En su segunda presidencia, Sanguinetti logró conformar un gobierno de coalición mucho más estable y duradero que el de su antecesor Lacalle. Este alcanzó su mayor logro en materia de respaldo parlamentario al comienzo de su mandato, con la aprobación de un ajuste fiscal y de una ley de empresas públicas –más bien de privatización de las mismas– que fue dejada sin efecto por el plebiscito del 13 de diciembre de 1992, en el cual la suma de votos de izquierda y colorados llevó al gobierno a una apabullante derrota (73% de la ciudadanía votó la anulación de la ley).

Ni bien fue electo, Sanguinetti construyó su coalición a partir de un acuerdo con Alberto Volonté, líder del sector blanco más votado en 1994 y convertido, en consecuencia, en presidente del Partido Nacional (y, según le gusta decir a alguna gente de su propio entorno, en una suerte de «co-presidente»). Sanguinetti consiguió, en definitiva, un socio mucho más dispuesto a colaborar con su gestión que lo que él mismo había colaborado con la de Lacalle, como éste suele recordarle. Pero además debe reconocérsele que consiguió impregnar sus iniciativas de una apariencia de mayor moderación, y a veces hasta de disimulo. En este último aspecto resulta paradigmática la aprobación de la reforma educativa, cuyo rechazo por los docentes y los estudiantes era más que previsible y que fue poco menos que «contrabandeada» en una serie de disposiciones de la ley de presupuesto de 1995, prácticamente sin repercusión pública en el momento de su sanción parlamentaria. Lo mismo ocurrió con la reforma del Estado, que consagra privatizaciones en determinadas áreas de las empresas y la administración, y hasta permite eludir algo que hasta ahora no sólo era una disposición constitucional sino también un principio ineludible del ser uruguayo: la inamovilidad de los funcionarios públicos, es decir la prohibición de prescindir de sus servicios, salvo al cabo de

un largo proceso que preveía la intervención del Parlamento y que requería probar la comisión de un delito.

En el primer año de su mandato, Sanguinetti logró también aprobar su propio ajuste fiscal, cuyos efectos recesivos –y en particular en materia de empleo– se sintieron durante un plazo mayor que el de Lacalle. Sancionó asimismo una ley denominada de «seguridad ciudadana», por la cual se crearon nuevos delitos y se agravaron las penas de otros, y que tiende a calmar la preocupación de la población por el aumento delictivo y, sobre todo, por la mayor violencia que los caracteriza. Se trata, como ha sucedido a lo ancho y a lo largo de América Latina, de una respuesta a los síntomas –y no a las causas– de la enfermedad, que los especialistas atribuyen a la marginación que las políticas económicas imponen a sectores cada vez más vastos de la sociedad. Son, por eso mismo, respuestas que nada resuelven; pero la coalición de gobierno se apresta a reducir esa ineficacia por el mismo camino y se propone introducir en 1997 disposiciones aún más severas de represión. La única explicación posible es que las «campañas de ley y orden» responden a una preocupación real de la gente y, en esa medida, más allá de la ineficacia de sus resultados, son altamente productivas como bandera proselitista.

Pero el mayor logro del año de Sanguinetti fue, sin duda, la aprobación de la reforma de la seguridad social. En esta materia, es también contundente la comparación con lo obtenido por Lacalle, quien durante su mandato había impulsado, sin éxito, cuatro iniciativas parlamentarias con ese objetivo. La reforma, que empezó a regir en abril de 1996, es una versión atemperada del modelo chileno. No implica la privatización total, sino que se trata de un régimen mixto: incluye la subsistencia de un sistema de reparto administrado por el Banco de Previsión Social, organismo oficial al cual deben aportar todos los trabajadores hasta determinado ingreso, y la creación de un sistema de ahorro individual, manejado por las Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional (AFAP), al cual debieron afiliarse todos los activos menores de cuarenta años. Se creó una AFAP pública –a la cual terminó afiliándose más de la mitad de los trabajadores, en una clara señal de que el uruguayo se siente más protegido bajo el ala del Estado–, y se autorizó la constitución de otras cinco privadas, una de ellas de carácter cooperativo. La reforma fue duramente cuestionada por el Frente Amplio, aunque el sector que encabeza el senador Danilo Astori –el más votado dentro de la coalición de izquierda en las elecciones de 1994– era partidario de su aprobación, mientras que a nivel social se opusieron la central de trabajadores –el PIT-CNT– y las organizaciones de jubilados. No está descartado que estas organizaciones impulsen una reforma constitucional, que debería plebiscitarse simultáneamente con las elecciones de 1999 y que podría dejar sin efecto algunas de las modificaciones sustanciales de la reforma de la seguridad social. La actitud a asumir ante esta iniciativa está en el orden del día de la discusión del Frente Amplio y puede convertirse en un factor de fuerte controversia y enfrentamientos internos.

En 1996 el presidente Julio María Sanguinetti logró, gracias a la coalición –y quizá antes que nada a esa naciente concientización de blancos y colorados de que sólo pueden actuar unidos frente al crecimiento de la izquierda–, algunos objetivos que en otras etapas de la vida del país hubieran resultado impensables, precisamente por la natural tendencia a la confrontación entre un partido en el poder y los que conforman la oposición. Un caso particularmente llamativo es el de la ley de rendición de cuentas, instancia anual en la que se consideran los ajustes al presupuesto del Estado y se incluyen los incrementos para los gastos de funcionamiento de las distintas reparticiones y para los salarios de sus funcionarios. Durante el trámite parlamentario, año tras año se suceden movilizaciones de los empleados públicos y de otros sectores afectados. Por primera vez en la historia, la última ley de rendición de cuentas no consagró un solo aumento, ni en gasto ni en salarios, en todo el ámbito de la administración pública. No hubo, por otra parte, mayores demostraciones de protesta por esa decisión y a ello contribuyó, seguramente, la situación de debilidad por la que atraviesa el movimiento sindical, muy desgastado por conflictos internos.

El 1º de marzo de 1996, al cumplir su primer año de gobierno, Julio María Sanguinetti proclamó que sus principales objetivos para ese año eran el combate contra la inflación y la aprobación de la reforma política, cuyo debate había impulsado prácticamente desde el comienzo de su mandato. La inflación, que del 44,1 % en 1994 había descendido al 35,4% en 1995, siguió bajando en 1996: llegó al 24,3%. Estuvo, de todos modos, varios puntos por encima de la meta que se había propuesto el ministro de Economía y fue la tercera más alta de América Latina. El objetivo para 1997 es no pasar del 15, o a lo sumo, el 17%. El año económico cerró además con un fenómeno novedoso en el país, aunque conocido en la región (sobre todo en la Argentina de Cavallo): hubo crecimiento del producto bruto interno y aumento del desempleo, lo cual refleja por un lado el incremento de la productividad y, por otro, el del sector servicios.

Las nuevas reglas de juego

La reforma política fue, en todo caso, el éxito más laborioso de Sanguinetti. Su trámite insumió más de un año y medio de negociaciones entre las cuatro fuerzas políticas con representación parlamentaria. A lo largo de ese proceso hubo idas y venidas, sobre todo del Partido Nacional y del Frente Amplio. Sin embargo, cuando todo indicaba que finalmente se había llegado a un acuerdo entre todos, la coalición de izquierda dio un paso al costado y se inclinó por el rechazo a la reforma. Esta se aprobó cómodamente en el Parlamento, con los votos de las otras tres fuerzas –y la constancia, nuevamente, del sector frenteamplista más votado en 1994 de que su negativa obedecía sólo a su deber de disciplina partidaria–, y fue sometida a plebiscito el 8 de diciembre, como exige la Constitución para cualquier modificación a disposiciones contenidas en la propia Carta. En esa instancia, la reforma también resultó aprobada, pero el margen fue tan pequeño que la noche de la votación sólo

pudo anunciarse un «empate técnico» y fue necesario aguardar el escrutinio definitivo para saber que efectivamente se había superado, como lo exige la Constitución, la mitad más uno de los votos emitidos (el porcentaje fue del 50,45%).

¿En qué consiste la reforma política? ¿Qué concedía cada una de las partes en una negociación en la cual, casi hasta último momento, todos parecían estar de acuerdo? El punto clave es, sin duda, la introducción del balotaje presidencial: a partir de las elecciones de 1999, si ningún candidato a Presidente obtiene la mitad más uno de los votos –hipótesis absolutamente inimaginable desde hace por lo menos 30 años–, habrá una segunda vuelta entre los dos candidatos más votados. Si uno de ellos fuera el del Frente Amplio –como es más que previsible que ocurra en el 99–, si además cada ciudadano decidiera su voto por razones ideológicas y si, por último, hubiera certeza de que aquellos que en la primera vuelta votaron a quienes hayan salido tercero y cuarto les obedecerán sobre el candidato al cual deban votar en la segunda vuelta, podría asegurarse que ganará el candidato blanco o colorado que dispute el balotaje con el candidato frenteamplista. Seguramente sobre la base de la verificación de esas tres hipótesis es que blancos y colorados apostaron a la introducción del balotaje presidencial en el sistema electoral uruguayo. Pero en definitiva la segunda y la tercera hipótesis no son tan probables como la primera, y por eso no se puede asegurar, ni mucho menos, que efectivamente el balotaje favorezca, al menos en las próximas elecciones, a un candidato colorado o blanco. Por el contrario, hay quienes entienden –como el frenteamplista Danilo Astori– que el nuevo mecanismo beneficiará al candidato de la coalición de izquierda, y en el mismo sentido también se pronuncian las primeras encuestas que analizan distintas hipótesis de balotaje entre los posibles candidatos de las principales fuerzas.

Lo que es innegable es que las posibilidades del Frente Amplio de llegar a la Presidencia en 1999 eran mayores si competía a la vez contra dos partidos tradicionales, como hasta ahora, que si debe hacerlo contra uno solo, apoyado –en la vuelta decisiva– por el otro partido tradicional. Para que el Frente Amplio aceptara esa modificación, blancos y colorados concedieron varias reivindicaciones históricas de la izquierda en materia de legislación electoral. Fundamentalmente, la obligación de cada partido de postular un solo candidato a la Presidencia de la República y a lo sumo dos a las intendencias municipales, y la separación en el tiempo de las elecciones presidenciales y parlamentarias, por un lado, y las municipales, por otro (lo cual permitirá al ciudadano votar a candidatos de distintos partidos en ambas instancias, una posibilidad que hasta ahora le estaba vedada). También una mayor transparencia en el mecanismo para la elección de los diputados y la obligación de que cada partido elija sus candidatos a la Presidencia y a las intendencias mediante elecciones internas a celebrarse seis meses antes de la primera vuelta presidencial.

Salvo el balotaje, es notorio que las modificaciones del sistema electoral generarán dificultades en el funcionamiento de los partidos tradicionales, acostumbrados a actuar como un rastrillo, con distintos sectores –cada uno con candidatos propios a la Presidencia, las intendencias y el Parlamento, y con propuestas políticas diferentes–, que a la hora del escrutinio sumaban sus votos en favor de la lista más votada. Estos cambios, por un lado, otorgan mayor garantía al ciudadano de que se respetará su voluntad, porque se elimina la posibilidad de que su voto por un candidato contribuya, contra su intención, al triunfo de otro. Pero además, en la práctica, no crearán mayores problemas de adaptación al Frente Amplio ni al Nuevo Espacio: el primero presentó candidaturas únicas a la Presidencia y a las intendencias en las cuatro elecciones en las que participó desde su fundación, los eligió siempre en congresos que reflejaban un funcionamiento interno democrático e impulsó un programa único de gobierno; y el Nuevo Espacio actuó de manera análoga en la única elección en que intervino.

El crecimiento de Tabaré Vázquez

El escaso margen por el que se impuso el Sí en el plebiscito, sobre todo teniendo en cuenta el amplio respaldo de las fuerzas políticas que lo impulsaban –que en la última elección habían sumado el 70% de los votos–, fue un doble triunfo para el actual presidente del Frente Amplio (y su candidato presidencial en 1994), Tabaré Vázquez. Entre los votantes del No está la mayor parte de los frenteamplistas (las encuestas estiman que un 90%), pero también un porcentaje importante del electorado del Nuevo Espacio y de los partidos tradicionales. En el caso de blancos y colorados, el mayor índice de desobediencia a la definición oficial se registró en el interior del país, donde los caudillos locales se resistían a cambiar un régimen electoral que claramente los favorecía, pero ese rechazo no se expresó, salvo algunas excepciones, de forma pública y abierta, a fin de no dejar mayores rastros de su indisciplina partidaria. Este conjunto de circunstancias convirtió a Vázquez en el gran abanderado del No, que debió enfrentar, prácticamente él solo, a más de media docena de dirigentes de primera línea de las otras tres fuerzas políticas y que obtuvo, en tan desigual confrontación, ese empate técnico que arrojó como resultado el plebiscito.

Hacia adentro del Frente Amplio –el balance le resultó igualmente favorable. La interna de la coalición de izquierda cuenta actualmente con dos dirigentes en condiciones de disputar la candidatura presidencial en 1999: Vázquez y Astori. Este último, que en la discusión del Frente defendió el Sí desde el primer momento, no participó abiertamente en la campaña del plebiscito, acatando una definición en la cual había quedado en minoría, pero su actitud no dejó dudas acerca de su posición y no se abstuvo de explicar públicamente los motivos que le habían llevado a ella. Antes del plebiscito, había encabezado la posición por el Sí y, a partir del estrecho resultado de la consulta popular, quedó convertido, en la interna, en el responsable de la derrota de la posición oficial. Las

encuestas se encargaron de mostrar que muy pocos de sus votantes de 1994 –que habían sido el 44% de los del Frente Amplio– votaron como él en el plebiscito. Si bien la conducta de Astori fue mucho más coherente a todo lo largo del proceso de discusión que la de Tabaré Vázquez –quien en la instancia en que el Frente Amplio se pronunció contra la reforma constitucional había defendido el Sí y después encabezó la campaña sosteniendo el No–, este último, por haber asumido la posición de la mayoría de la coalición, hacer su defensa pública en los grandes medios de comunicación y en actos en todo el país y estar muy cerca de ganar un plebiscito contra todos los demás partidos, obtuvo una clara ventaja –que no será fácilmente desmontable– en la carrera entre ambos precandidatos frenteamplistas.

Cuatro internas agitadas

La situación del Frente Amplio es inédita en varios aspectos. Representa a un tercio de la ciudadanía y en principio está en mejores condiciones que los demás partidos para ganar la Presidencia en 1999. Sin embargo, es una fuerza que internamente ha perdido solidez. En primer lugar, porque tanto en la coalición de izquierda como en los distintos partidos que la integran pesan cada vez menos las definiciones ideológicas y programáticas y cada vez más la personalidad de sus dirigentes. El cambio, entre otras consecuencias, ha generado nuevas formas de enfrentamientos y crisis. Una de ellas fue la que llevó, a comienzos de febrero de 1996 –el día en que la coalición cumplía 25 años– a la renuncia de su presidente. El general Liber Seregni, que tenía en ese momento 79 años, no sólo había presidido el Frente desde su fundación, sino que lo había hecho desde una posición independiente de todos los sectores y con la preocupación prioritaria y permanente de moderar y articular las diferencias entre los sectores. Cualquiera fuera su sucesor, estaba muy claro que ya no tendría esas características, sino las de alguien directamente vinculado a alguna de las organizaciones. El candidato natural a ocupar la vacante era Tabaré Vázquez, cuya designación finalmente se produjo diez meses después.

Pero además el Frente Amplio no ha tenido, en los últimos años, una presencia en la vida nacional acorde con el peso que representa ese tercio de la ciudadanía que lo respalda. Ha ido perdiendo iniciativa política e incluso muestra una enorme dificultad para pronunciarse sobre muchos de los grandes problemas del país, que reclaman un tiempo de reflexión y debate, y también sobre los asuntos que la coyuntura va poniendo sobre el tapete y que exigen rápidas definiciones. En estos casos suele haber, más que nada, declaraciones individuales de dirigentes, que muchas veces causan polémicas y enfrentamientos, generalmente públicas y en ocasiones bastante fuertes.

El Frente Amplio parece, en definitiva, muy absorbido por su propia interna. Lo que se discute –no tanto de modo explícito, sino más bien en el trasfondo de cada tema–, es cómo actuar hoy con los necesarios aliados de mañana, con

quiénes se podrá hacer acuerdos para ganar el balotaje y para tener mayoría en el Parlamento y, en el fondo, cuál es el máximo de agua que se le podrá echar al vino para que éste no pierda su sabor. El vino es, por supuesto, el programa de la izquierda frenteamplista.

En cuanto a la izquierda no frenteamplista, el Nuevo Espacio, no tiene dificultades para definir su candidatura: el liderazgo de Rafael Michelini es indiscutido. Todo indica que, sin perjuicio de mantener su propio perfil en la política nacional –como lo ha hecho hasta ahora–, el debate interno se sitúe en tomo a los acuerdos pre y post electorales que necesariamente se verá obligado a hacer –o descartar– con la izquierda que tiene posibilidad de llegar al gobierno. Esa discusión es inevitable tanto en el Frente Amplio como en el Nuevo Espacio, más allá de que la suma de los votos de ambas fuerzas no será suficiente para lograr mayoría parlamentaria.

Los partidos tradicionales, que han logrado funcionar en una coalición de gobierno, presumiblemente podrían trabajar juntos con mayor comodidad en la oposición. Sin embargo, la situación interna no es, por distintos motivos, la mejor que podrían tener para enfrentar, por primera vez en su historia, a un tercero en discordia, y hay una dificultad que será similar para ambas fuerzas: la definición de un candidato único.

El Partido Nacional todavía no ha terminado de curar las heridas con que salió de su gobierno. Las diferencias se generaron a partir de las disputas por los nuevos liderazgos y por las diferentes actitudes que asumieron cada uno de los sectores ante la avalancha de denuncias de corrupción durante el gobierno de Luis Alberto Lacalle. Los precandidatos hoy son demasiados y la índole de las disputas pueden convertir la interna por la candidatura en una batalla feroz. Las figuras con mayores posibilidades son el actual presidente del directorio blanco, Alberto Volonté, el propio Lacalle y quien fue su candidato en 1994 y se separó del sector del expresidente cuando empezaron a trascender las primeras denuncias de corrupción, Juan Andrés Ramírez.

En el Partido Colorado, una de las mayores dificultades es que no se vislumbra quién puede suceder al actual presidente Julio María Sanguinetti en la conducción de su sector, claramente mayoritario entre los colorados. Los aspirantes son varios, pero ninguno con suficiente peso para imponerse al resto, y la competencia entre ellos es tan pareja que en principio no parece probable que la definición que, llegado el momento, haga Sanguinetti por uno de ellos, pueda ser pacíficamente aceptada por los demás. La situación es tal que en más de una oportunidad se ha hablado de impulsar una nueva reforma constitucional para permitir la reelección del presidente; la diferencia con los antecedentes tan cercanos de Argentina y Brasil es que Sanguinetti, hasta ahora al menos, se ha opuesto con vehemencia a esa posibilidad. La interna colorada se complica aún más por el hecho de que un sector minoritario del partido cuenta con un dirigente con personalidad y vocación de candidato presidencial:

Jorge Batlle. Ofrece la desventaja de haber postulado ya tres veces a la Presidencia y no haber ganado nunca, y la de haberse peleado muy seriamente en 1989 con Sanguinetti (lo que sin duda le ayudó a perder las elecciones de ese año contra Lacalle). Pero ha recompuesto su relación con Sanguinetti, y el simple hecho de que hoy aparezca como uno de los posibles candidatos presidenciales colorados era hasta hace poco impensable.

La corrupción gana protagonismo

Muchos de los actos de corrupción de alto nivel ocurridos durante el gobierno de Lacalle habían sido objeto de denuncias periódicas durante su mandato, pero fue necesario que las autoridades involucradas dejaran sus cargos para que los hechos fueran investigados por el Parlamento y la justicia. Hasta ahora han sido procesados y enviados a la cárcel tres altos jerarcas del gobierno blanco –incluido un ex-ministro de Economía– y el propio ex-presidente debió concurrir a declarar ante la justicia penal en cinco oportunidades.

Entre los casos más notorios figuran la re-privatización, en circunstancias flagrantemente irregulares, del Banco Pan de Azúcar, que estaba siendo gestionado por el Estado; las ventas a varias reparticiones públicas (en primer lugar a los ministerios de Salud Pública y Defensa Nacional) de materiales y equipos técnicos suministrados por la empresa española Focoex a precios más altos que los del mercado, y cuya inutilidad quedó demostrada porque muchas de esas compras nunca llegaron a utilizarse; el funcionamiento de una verdadera usina de tráfico de influencias, a cuyo frente había un particular que ordenaba a algunos ministros y otros jerarcas de la administración a quiénes y en qué condiciones debían adjudicarse las obras públicas y distribuía las remuneraciones que por ese concepto cobraba a los particulares; y las maniobras dolosas cometidas por un ex-presidente del Banco de Seguros del Estado y un ex-asesor de Lacalle.

Además de la investigación sobre la venta del Pan de Azúcar, banco que debió ser intervenido nuevamente por el Estado, hay varias denuncias judiciales que involucran directamente al ex-presidente, como las relacionadas con la adjudicación de canales de televisión por cable y ondas radiales, y con decisiones en materia de forestación que lo beneficiaron directamente.

Derechos humanos, una asignatura pendiente

La llamada ley «de caducidad», esa suerte de amnistía encubierta a los militares responsables de violaciones a los derechos humanos durante la dictadura, que el Parlamento aprobó en diciembre de 1986 y que la ciudadanía confirmó mediante un plebiscito en abril de 1989, no cerró en absoluto todas las heridas.

La propia ley –que sigue siendo rechazada por los organismos de defensa de los derechos humanos dependientes de las Naciones Unidas y de la OEA, por considerarla violatoria de convenios internacionales ratificados por Uruguay– contiene disposiciones que los gobiernos de Sanguinetti y de Lacalle no han cumplido. Hay un artículo que obliga a las autoridades a investigar qué destino corrió cada uno de los desaparecidos, ya no para castigar a los culpables sino para informar a los familiares cómo, cuándo y dónde murieron, así como a buscar la actual identidad de los niños desaparecidos, es decir robados a sus padres y presumiblemente entregados a militares o personas cercanas a ellos. Nada se hizo en estos aspectos, más que pedirle a un fiscal militar que investigara, con el previsible resultado de que, después de unos pocos interrogatorios, todos los casos fueron archivados sin llegar a conclusión alguna.

A principios de 1996 hubo una serie de movilizaciones, impulsada por varias organizaciones sociales y, a nivel político, sobre todo por el senador Rafael Michelini, reivindicando «Verdad, memoria y nunca más». La culminación fue el 20 de mayo, cuando se cumplían 20 años del asesinato de Zelmar Michelini (padre de Rafael) y Héctor Gutiérrez Ruiz en Buenos Aires, con una impresionante marcha de silencio que convocó a una de las mayores manifestaciones callejeras desde la restauración democrática.

Fue el primer signo del año de que la cuestión de los derechos humanos, resucita hace años desde el punto de vista legal –más allá de las dudas jurídicas que sigue generando esa solución–, no está saldada. Algunos episodios demostraron que el perdón social es más difícil de obtener que el legal para los torturadores y colaboradores de la dictadura. El caso más ilustrativo es el de un militar retirado, actualmente estudiante de antropología en la Universidad estatal. Denunciado como torturador en una nota periodística, optó por reconocer públicamente que lo había sido y justificó no sólo su participación en las circunstancias en que debió actuar, sino también la tortura como método para obtener información en medio de una guerra como la que, según él, existía en aquel momento. Llegó a escribir un libro defendiendo su tesis. Pero generó el rechazo de sus actuales compañeros de estudios, que lo declararon «persona no grata» y de sus profesores, que se niegan a examinarlo por considerar que no tendrían la objetividad necesaria para hacerlo, lo que ha dado lugar a una controversia legal en la Universidad, aún no resuelta.

Otro hecho heredado de la coordinación represiva entre las dictaduras del Cono Sur demuestra la subsistencia en democracia de la colaboración entre los protagonistas de aquella coordinación: el secuestro, traslado clandestino al Uruguay, privación de libertad y homicidio de Eugenio Berríos, ex-agente de la Dina chilena. La investigación judicial del caso, pese a que están perfectamente identificados varios militares uruguayos que participaron en distintas etapas de la operación, inexplicablemente no ha llegado a resultado alguno.

La muerte del Maracaná

Uruguay no es, ni mucho menos, un país acostumbrado a los cambios. No tanto porque éstos no ocurran, sino por lo que a la gente le cuesta asumirlos.

La posible llegada del Frente Amplio al gobierno nacional sería sin duda un gesto de ruptura, pero en todo caso se verá preparada en la aceptación de la gente por la gestión de dos gobiernos frenteamplistas de la Intendencia de Montevideo que mejoraron sensiblemente la gestión municipal, aunque sin imprimirle un claro sesgo de izquierda. Mucho más removedor será, por ejemplo, la adaptación al funcionamiento pleno del Mercosur, para el cual Uruguay se ha venido preparando lenta y resignadamente.

En 1950 murió Obdulio Varela, el capitán del seleccionado uruguayo que le ganó a Brasil la final del campeonato mundial de fútbol de 1950, en el recién inaugurado estadio de Maracaná. Fue hace casi 50 años, pero aquella última gran hazaña deportiva marcó al país no sólo en materia futbolística. En muchos ámbitos de la vida nacional se han seguido evocando las glorias del pasado y esperando un nuevo Maracaná. La muerte del Negro Obdulio adquiere, en ese sentido, un contenido simbólico: Maracaná ya fue.

Montevideo, marzo de 1997